

Políticas públicas y economía social en la agricultura familiar argentina

Mario Lattuada ▶
mjlatuada@gmail.com
María Elena Nogueira
mariaelena.nogueira@gmail.com
Marcos Urcola
CONICET –
Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Argentina es un país federal integrado por 23 provincias más el territorio de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con una extensión de 2.780.403 km², con una baja densidad poblacional de 14,4 habitantes por km² y una reducida tasa de crecimiento demográfico (1,1% anual)¹.

La República Argentina es clasificada en la actualidad como un país de ingreso mediano-alto, con un PIB anual de algo más de 446.044 millones de dólares, una población de algo más de 40 millones de personas y un ingreso medio per cápita de 10.943 dólares. No obstante, la distri-

bución del ingreso es desigual. En 2012, los datos oficiales indicaban que el 10% de la población con mejores remuneraciones concentró el 25,5% de los ingresos totales, mientras que el 10% más pobre concentró el 1,6%².

El nivel de pobreza en el país evolucionó desde un 19,9% de su población en 1992 a un 38,8% en 2001. En 2002, luego de la devaluación de la moneda y la crisis política institucional, el porcentaje de población con ingresos por debajo de la línea de pobreza alcanzó un 51,7% del total de su población nacional, mientras que un 25,2% se encontraba en su grado extremo o indigencia³.

El porcentaje de la población con niveles de pobreza e indigencia es, en la actualidad, un tema de debate en Argentina, debido a las distintas fuentes para registrar los niveles de inflación contra los que se miden los índices de pobreza e indigencia. La información oficial proporcionada por INDEC (2010), a partir de la Encuesta Permanente de Hogares, sostiene que la pobreza en el país alcanza al 9,9% de la población (alrededor de 4 millones de personas), de los cuales el 2,5% (casi un millón de personas) se encuentra en la condición de indigencia. Por su parte, la Universidad Católica Argentina, a través de su Encuesta de la Deuda Social Argentina, eleva ese número a prácticamente el doble: 8,5 millones de pobres y 2 millones de indigentes para la misma época. No obstante, en ambos casos, las fuentes oficiales y privadas coinciden en un proceso de mejora progresiva de los indicadores, más intenso en el período 2003-2007 y más lento a partir de 2007, debido al aumento de los programas asistenciales y del gasto social en general, la recuperación del empleo y los incrementos salariales que acompañaron a la inflación⁴.

La población rural de Argentina, entendida como la que reside en centros poblados de menos de 2.000 habitantes y en áreas dispersas, equivale a algo menos del 10% de la población, y se estima que cerca de un tercio del total (alrededor de un millón de personas) es pobre, prevaleciendo entre sus integrantes la población indígena, las mujeres, los jóvenes y los trabajadores no permanentes sin tierras⁵. El nivel de



▼
El sector agropecuario es muy importante en Argentina. Este país es uno de los principales productores mundiales de alimentos, con un sector agrícola-ganadero y agroindustrial moderno, con explotaciones empresariales muy capitalizadas y una agricultura familiar relevante en términos económicos y sociales. Agricultura y ganadería representan el 6% del PIB y con la agroindustria superan el 20%

pobreza en las regiones del norte del país continúa siendo elevado, llegando a casi el 26% en el noreste y al 21% en el noroeste, con niveles de indigencia del 7,1% y el 5,3%, respectivamente⁶.

El sector agropecuario es muy importante en Argentina. Este país es uno de los principales productores mundiales de alimentos, con un sector agrícola-ganadero y agroindustrial moderno, con explotaciones empresariales muy capitalizadas y una agricultura familiar relevante en términos económicos y sociales. Agricultura y ganadería representan el 6% del PIB y con la agroindustria superan el 20%. Entre 2005 y 2012, las exportaciones de bienes argentinos crecieron desde 40.013 millones hasta 83.950 millones de dólares, experimentando un alza del 103%. Las exportaciones de origen agropecuario (bienes primarios: 20.212 millones de dólares, y manufacturas: 28.192 millones de dólares) representan cerca del 60% del total de las exportaciones de bienes y servicios, el 18% del PIB y el 22% del valor agregado. La agricultura es una importante fuente de puestos de trabajo, generando alrededor del 20% del total si se incluyen el transporte y el comercio relacionados con el sector⁷.

La agricultura familiar, en paralelo a una agricultura y una ganadería fuertemente capitalizadas, mantiene un papel importante en la producción y en la estructura socioeconómica del medio rural. En 2002, con datos del último censo nacional agrario disponible, se identificaban 251.116 explotaciones como "agricultura familiar" (el 75% del total de explotaciones agrarias), que controlaban 30,9 millones de hectáreas

(equivalentes al 17,7% de la superficie total) y generan el 19% del valor total de la producción agraria nacional.

Este tipo de explotaciones familiares tiene como residentes a 823.235 personas y aporta el 64% del total del empleo agropecuario nacional. Su presencia es mayoritaria en el noroeste y noreste del país (entre un 78% y un 92% del total), y disminuye en importancia en las regiones de Cuyo, Pampeana y Patagonia (representa entre el 60 y el 69% de las explotaciones). En cuanto a los productos, las explotaciones familiares representan entre el 85% del total de explotaciones dedicadas a la producción hortícola (papa, cebolla, acelga, tomate...), el 94% en los cultivos industriales o regionales (tabaco, algodón, yerba mate, caña de azúcar...) y más del 50% en la producción de granos (maíz, soja, trigo, girasol...) (Obschatko, 2009).

Desregulación de la economía, globalización de los mercados y asociaciones económicas en la agricultura familiar

El pluralismo asociativo que caracterizó el ámbito rural de Argentina durante más de un siglo, se diversificó y profundizó de forma vertiginosa a partir de la década de 1990 en un contexto de retracción del Estado y de apertura y globalización de la economía.

En esa década, algo más del 20% de las explotaciones agropecuarias desapareció de la estructura agraria, en su gran mayoría pequeñas y medianas explotaciones familiares cuyos titulares eran los principales asociados a las diversas formas de cooperativismo⁸. El número de cooperativas y de socios, así como el nivel de su actividad económica, disminuyó significativamente⁹ como consecuencia del proceso de crisis y concentración que afectó a sus bases sociales y debido también a la debilidad financiera de muchas de sus entidades, a las mayores exigencias de competitividad en el comercio y transformación de granos, y a las deficiencias gerenciales que se hicieron evidentes ante el nuevo contexto económico (cuando los efectos inflacionistas y las devaluaciones de la moneda ya no compensaban las deficiencias de gestión).

La quiebra y desaparición de muchas cooperativas constituyeron marcas negativas en la conciencia colectiva de numerosos productores respecto de las empresas asociativas tradicionales, alimentadas por el discurso predominante de la época sobre la ineficiencia de las mismas pa-



▼
En 2002, con datos del último censo nacional agrario disponible, se identificaban 251.116 explotaciones como “agricultura familiar” (el 75% del total de explotaciones agrarias), que controlaban 30,9 millones de hectáreas (equivalentes al 17,7% de la superficie total)



ra afrontar la competencia en mercados no inflacionarios, abiertos y globales.

El cooperativismo agrario en este proceso fue concentrándose y las entidades cooperativas de mayor dimensión y solidez pusieron en tensión los principios de la doctrina cooperativa, afectando incluso a las prácticas cotidianas de las propias cooperativas y planteándose cambios sustanciales de sus normas reguladoras. La dialéctica mutualista/empresarial que las caracterizaba tendió a fortalecer el segundo de los términos como condición de viabilidad en un contexto caracterizado por la apertura, desregulación y globalización de la economía, y por el alto grado de vulnerabilidad de sus asociados.

En ese contexto, los productores de la agricultura familiar se vieron impulsados a la búsqueda de nuevas formas de organización que dieran respuesta adecuada a necesidades concretas e inmediatas, predominantemente en el área productiva, tecnológica o comercial. Esta búsqueda exigía integrarse en redes más amplias y heterogéneas para responder a sus nuevas y diversas necesidades y demandas, generando una explosión pluralista de asociaciones de todo tipo en el territorio nacional.

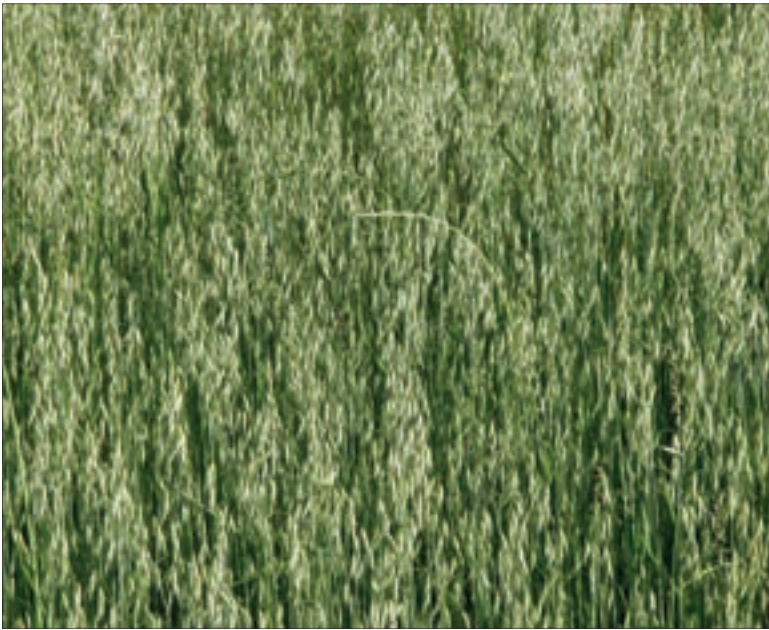
Este proceso tuvo dos factores que confluyeron en su gestación y dinámica. El primero de esos factores fueron las iniciativas de tipo asociativo emprendidas por los propios actores socioeconómicos en respuesta al cambio de las reglas de juego en un contexto donde ni el Estado ni las históricas asociaciones económicas del agro podían recurrir a las viejas recetas para garantizar su supervivencia y continuidad.

El segundo factor fue la implementación de

programas públicos de asistencia de los pequeños y medianos productores agrarios, que tuvo una importancia creciente en el fomento de formas asociativas de diverso tipo en el medio rural. Con escasos antecedentes previos en la historia argentina, durante la década de 1990 se pusieron en marcha numerosos programas de este tipo¹⁰, dependientes de diferentes agencias estatales (INTA, SAGPyA...) y financiados mediante diversas fuentes (Presupuesto Nacional, BID, BM, FIDA...).

Los programas eran diversos en sus objetivos, si bien respondían a una lógica compensatoria destinada a promover el asociacionismo entre los sectores más vulnerables de la agricultura argentina, buscando mejorar sus rentas e impulsar la seguridad alimentaria a través de varias vías: la intensificación y/o diversificación de la producción; el aumento de escala productiva para reducir costes y ganar capacidad de negociación; la participación en nuevos eslabones de la cadena productiva y, en la medida de lo posible, la articulación con mercados dinámicos.

Los resultados de estas acciones se manifestaron en miles de experiencias grupales en los territorios donde los citados programas fueron aplicados. Estas experiencias alcanzaron en su mayoría un nivel de desarrollo que no superaba el de grupos informales o formas protoasociativas. Solo en algunos pocos casos adoptaron estructuras formales de organización (por ejemplo, se constituyeron como asociaciones civiles o como sociedades de hecho, con las limitaciones que ello implicaba para su consolidación en el mercado). En otros pocos casos hubo grupos que optaron por convertirse en algún tipo de sociedad



▼
En la primera década del siglo XXI, la problemática agraria fue creciendo en importancia en la región del Mercosur. También ganó importancia en el ámbito nacional argentino, gracias a una estrategia gubernamental explícita dirigida a la reorientación de los programas de desarrollo rural

comercial o adaptar asociaciones preexistentes (gremiales, consorcios de riego...) con objeto de avanzar en temas comerciales o de transformación de la producción.

Este era un contexto marcado por la concentración y exclusión de los pequeños agricultores de la estructura productiva y comercial argentina; un contexto que no facilitaba la consolidación de las asociaciones económicas en la agricultura familiar. Sin embargo, a pesar de ello, estas iniciativas hicieron posible la construcción progresiva de una extensa y compleja red de actores sociales y económicos en el medio rural; una red integrada por los productores agrarios, pero también por una población rural muy diversa (técnicos de las organizaciones agrarias y de las ONG) y por agencias estatales de diferentes niveles, que acumulaban experiencia gracias a su interacción cotidiana en el territorio.

Estado, políticas de intervención y multifuncionalidad

Las condiciones que definieron aquel contexto de acumulación de los años noventa volvieron a cambiar de forma dramática a partir de la crisis del año 2001. Las reglas de juego existentes durante una década desaparecieron junto a la crisis del sistema financiero, la ruptura de la convertibilidad, la declaración del *default* en el pago de la deuda externa, el cuestionamiento masivo del sistema de representación política y del sistema judicial y la creciente incertidumbre políti-

ca, económica y social en el conjunto de la ciudadanía.

A partir del año 2002, un nuevo paradigma en la relación *Estado-mercado* se instala en Argentina. El Estado ha vuelto a ocupar un rol decisivo en la redistribución de costes y beneficios en el conjunto de la sociedad y, particularmente, en el sector agropecuario, todo ello en un marco donde la política pública se consolida de forma explícita y creciente como reguladora de la economía y del mercado.

Los pequeños productores y la agricultura familiar adquieren en esta etapa un lugar destacado en la agenda pública. En la primera década del siglo XXI, la problemática agraria fue creciendo en importancia en la región del Mercosur. También ganó importancia en el ámbito nacional argentino, gracias a una estrategia gubernamental explícita dirigida a la reorientación de los programas de desarrollo rural con la finalidad de fortalecer el tejido asociativo en un medio rural tradicionalmente postergado.

Nuevos programas y mayores recursos¹¹ fueron destinados a la agricultura familiar a partir de estrategias que intentaban reunir, coordinar y armonizar los diferentes programas y fuentes de financiación¹². A ello se añadieron diversos esfuerzos institucionales destinados a facilitar a los pequeños productores su acceso a los mercados y la creación de asociaciones, simplificando ciertos requisitos para la regularización de sus actividades, como el *monotributo social* o los requerimientos de integración para las cooperativas de trabajo asociado y de servicios agropecuarios.

Esta perspectiva se fortaleció con la creación del Ministerio de Agricultura en el año 2009 y la elevación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (creada un año antes) al rango de Secretaría de Estado. Todo ello contribuyó decididamente a consolidar en la agenda pública la problemática de la agricultura familiar y su representación.

En el actual contexto político-económico se han reorientado los fines perseguidos para el fortalecimiento del tejido asociativo en el ámbito de la agricultura familiar. En esta nueva etapa se busca que los procesos asociativos maduren no solo como alternativas económicas para afrontar las debilidades del sector agrario en el mercado, sino también como vía de *empoderamiento* de estos sectores de agricultura familiar que hasta ahora habían estado ausentes (invisibles) de los procesos de interlocución con el Estado (reservados tradicionalmente a las asociaciones gremiales del empresariado pampeano). Se busca fortalecer

sus estructuras organizativas e impulsar su integración en redes sociales y políticas más amplias, de manera que puedan ser reconocidos como interlocutores en los procesos de toma de decisión de las políticas públicas y puedan participar en dichos procesos¹³.

Esta perspectiva promovida desde el Estado refuerza un rasgo estructural de las asociaciones que integran lo que se denomina la *economía popular o solidaria*, a saber: el *carácter multifuncional* de su actividad, condición que los lleva a actuar simultáneamente en la esfera económica, social y política. Su objetivo principal es suplir las necesidades materiales de sus miembros, así como satisfacer sus aspiraciones de reconocimiento, inserción social y autonomía, trascendiendo de este modo los límites de la relación mercado-Estado (Nyssens, 1996).

Los resultados

Dos décadas de políticas públicas promoviendo el asociacionismo en la agricultura familiar en contextos ideológicos, políticos y económicos sustancialmente diferentes han dejado un saldo de experiencias diversas y complejas. Las iniciativas llevadas adelante en este proceso de continuidades y rupturas de las políticas públicas contribuyeron a varias cosas.

Por una parte, a la conformación de una multiplicidad de asociaciones económicas que, si bien no adoptaron la forma jurídica de cooperativas, se expresaron, en cambio, en un abanico de formas organizativas heterogéneas, con diversos grados de formalización y diferentes estadios de desarrollo en sus procesos de consolidación. Por otra parte contribuyeron a que se recuperaran las estrategias de constitución de cooperativas, especialmente en el caso de los medianos productores agrarios y de aquellos segmentos de la agricultura familiar con mayor disponibilidad de recursos.

Las cooperativas

En el caso de las cooperativas agrarias, y debido a la intensa actividad de promoción durante la última década, cabe señalar que a 31 de diciembre de 2010 el número total de cooperativas ascendía a 1.606, de las cuales 800 (50%) se encontraban en situación de regularidad en su funcionamiento. Del total de cooperativas agrarias registradas, el 60% (966) habían sido crea-



das entre los años 2001 y 2010, aunque solo el 38% (364) de las mismas se encontraba en situación de funcionamiento regular. A pesar de ello, estas nuevas cooperativas representaban en esa fecha el 60% del total de cooperativas activas y en situación regular (Obschatko *et al.*, 2011: 80); en conjunto las nuevas cooperativas duplicaban prácticamente el número de cooperativas activas regulares existente en la década de 1990 (Lattuada *et al.*, 2011: 20).

Pero además del crecimiento en número, las cooperativas agrarias se transformaron y diversificaron. Junto a las cooperativas tradicionales de acopio, comercialización y transformación de la producción, surgieron nuevos modelos de *cooperativas emergentes* (tales como las cooperativas de negociación, las de gestión de la producción, las de la agroindustria familiar, las de trabajo de producción colectiva, las de trabajo para servicios rurales, las de mercados cooperativos) y se reactivaron cooperativas tradicionales a partir de las exigencias de nuevos productos o mercados (Obschatko *et al.*, 2011: 129-140).

Las asociaciones no cooperativas

Asimismo surgieron centenares de asociaciones económicas que, por diversos motivos, no adoptaron la forma jurídica de cooperativas. Estas asociaciones no cooperativas han venido orientando su actividad según una lógica *multifuncional*, que les permite trascender la esfera del mercado para desplegarse con similar intensidad tanto en el espacio público del Estado como en el ámbito de la sociedad civil, buscando apoyo técnico y eco-

▼
Las asociaciones no cooperativas se caracterizan por integrar a pequeños y medianos productores rurales que disponen de recursos productivos y financieros limitados y que llevan adelante la producción a partir de su propio trabajo o de la gestión directa de los predios con la colaboración de mano de obra familiar o de un reducido número de asalariados

nómico, así como reconocimiento político y social.

Las asociaciones no cooperativas se caracterizan por integrar a pequeños y medianos productores rurales que disponen de recursos productivos y financieros limitados y que llevan adelante la producción a partir de su propio trabajo o de la gestión directa de los predios con la colaboración de mano de obra familiar o de un reducido número de asalariados. También se integran en ellas grupos vulnerables de la población rural (trabajadores sin tierras, personas subocupadas, artesanos, poblaciones aborígenes...), que, como hemos señalado, solo de manera marginal se asociaban a las cooperativas formales.

Cabe afirmar que estas asociaciones se han constituido como grupos informales bien sobre la base de diversas relaciones de confianza (vecindad, amistad, parentesco...) o bien a partir de estrategias de movilización impulsadas por las agencias públicas o por la propia sociedad civil ante el imperativo de solucionar ciertas necesidades básicas. El desarrollo organizacional de estos grupos les ha conducido a adoptar diferentes formas jurídicas de menor o mayor adecuación a sus objetivos, llegando en ciertos casos a integrarse (junto a las ONG y a las asociaciones reivindicativas) en complejas redes de colaboración público-privada atraídas por los incentivos de las agencias públicas y de los programas de desarrollo.

En la mayoría de los casos, los integrantes de estas asociaciones económicas no cooperativas realizan algún tipo de adquisición de bienes

e insumos en forma conjunta, y, en menor medida, comercializan parte o toda su producción de forma asociada, en mercados mayoritariamente locales o provinciales. Existen algunas experiencias que merecen ser destacadas por haber conseguido llegar a los mercados nacionales e internacionales, y hay también casos de asociaciones que han logrado un cierto nivel de articulación en redes y agrupamientos interasociativos, tales como *consorcios*, *clústers* y *ferias francas*, y han firmado convenios con grandes cooperativas, así como con empresas agroindustriales y supermercados. En estas redes de mayor complejidad se observa la presencia y acompañamiento de instituciones y agencias estatales que participaron activamente en el momento de su creación y que luego ejercen un importante papel de seguimiento ofreciéndoles asistencia técnica, administrativa y comercial.

Reflexiones finales: los próximos desafíos para el asociacionismo agrario

Como hemos visto a lo largo de este artículo, la experiencia de las últimas dos décadas en el ámbito de la agricultura familiar argentina ha sido frondosa en lo que se refiere a la constitución de grupos formados por productores agrarios y por otros actores de la población rural, recibiendo capacitación, asistencia técnica y financiación por parte del Estado. También ha sido positivo este periodo en lo que se refiere al número de *asociaciones* (sean de vocación económica o reivindicativa) creadas en el sector agrario.

Sin embargo, el balance es menos satisfactorio si nos alejamos de los aspectos cuantitativos y nos fijamos en los grupos y asociaciones que han sido capaces de desempeñar sus actividades de forma eficiente y autónoma en el mercado y en el conjunto de la sociedad.

Es un hecho que, en el ámbito de la agricultura familiar argentina, el número de cooperativas y de asociaciones no cooperativas que realmente han tenido capacidad para consolidarse en los últimos años, es cuantitativamente reducido en relación al número de beneficiarios de los programas de desarrollo que han participado en experiencias grupales. En su gran mayoría, las asociaciones surgidas al amparo de esos programas continúan necesitando el apoyo técnico y financiero de las agencias estatales, sobre todo cuando su actividad entra en cuestiones de comercialización y transformación de la producción.



No obstante, todas estas asociaciones constituyen en sí mismas la base de un importante *capital social* en las comunidades rurales, siendo un potencial que, a pesar de sus debilidades, está ahí, listo para ser debidamente activado¹⁴. El desafío en el futuro próximo radica en aumentar la tasa de supervivencia y consolidación de estas nuevas asociaciones de tal modo que se pueda superar el ámbito restrictivo de las experiencias aisladas (beneficiosas sin duda, pero solo para sus integrantes) y pueda ir construyéndose un *ca-*

pital social comunitario capaz de contribuir al desarrollo de los territorios.

Para ello es conveniente conocer en profundidad los procesos que han atravesado las experiencias consideradas exitosas, rescatar sus enseñanzas para transmitirlos y replicarlos, y avanzar en la adopción de los cambios y reformas que sean necesarios para que estas iniciativas puedan formalizarse y consolidar su autonomía y eficiencia ante el mercado, la sociedad y el propio Estado. ■

▼ Notas

- ¹ República Argentina, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010): *Censo Nacional de Población y Vivienda 2010* (datos provisorios), Buenos Aires.
- ² República Argentina, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012): *Encuesta Permanente de Hogares*.
- ³ Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) - República Argentina (2010): *Evaluación del programa en el país*, Informe n° 2223-AR, Buenos Aires.
- ⁴ Universidad Católica Argentina (2011): *Observatorio de la Deuda Social*. Buenos Aires; Observatorio Social (2012), "La pobreza crónica en la Argentina". Serie Informes de coyuntura del Observatorio Social, Informe 29, marzo, Buenos Aires.
- ⁵ Banco Mundial (2007): *Los pobres invisibles. Un panorama de la pobreza rural en la Argentina*, Informe n° 39947-AR dirigido por Gabriel Demombynes y Dorte Verter, Región América Latina y el Caribe, 25 de junio, Buenos Aires.
- ⁶ Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) - República Argentina (2010): *Evaluación del programa en el país*, Informe n° 2223-AR, Buenos Aires.
- ⁷ Ministerio de Economía, República Argentina (2013). http://www.mecon.gov.ar/economica/basehome/dnper_complejos_exportadores.htm (junio).
- ⁸ De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario de 2002, el 79% de los asociados a cooperativas pertenece a establecimientos agropecuarios familiares, mientras que solo el 9% corresponde a pequeños productores.
- ⁹ Las cooperativas agropecuarias disminuyeron en número alrededor de un 21% durante el período 1985-1994, con una reducción de su participación en el volumen de almacenaje de granos de Argentina del 26,9% al 20,4% y de su actividad en la faena de ganado del 2,05% a solo el 1,28%. También disminuyó el aporte cooperativo a las exportaciones agropecuarias del país del 17,1% al 5,7% entre los años 1980 y 1996 (Lattuada *et al.*, 2004: 52-57).
- ¹⁰ Cambio Rural, Programa Minifundio, Prohuerta, Programa Social Agropecuario (PSA), Proinder, Prodernea, Prodernoa, Programa de Reordenamiento de Áreas Tabacaleras, Ley de Inversiones de Bosques Cultivados n° 25.080 y Proyecto Forestal de Desarrollo (Caapca).
- ¹¹ Solo el Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales (PROSAP) aumentó su presupuesto de 267 millones de dólares en la década de 1990 a 1.021 millones de dólares en la actualidad. A ello cabe agregar los recursos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (que multiplicó varias veces su presupuesto), la intensificación de las acciones del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) (en el apoyo a la conformación de cooperativas) y los recursos provenientes de fuentes no tradicionales para el sector (como el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, cuyos programas también alcanzan a la población de la agricultura familiar).
- ¹² En INTA, a partir de la creación del Programa Federal de Desarrollo Rural (Profeder), y en la ex Secretaría de Agricultura, con la creación de la Unidad de Cambio Rural (UCAR).
- ¹³ Por ejemplo, a partir del Foro Nacional de la Agricultura Familiar cuyo proceso de construcción y participación es analizado por Lattuada *et al.* (2012).
- ¹⁴ Sobre las condiciones necesarias para la constitución de capital social véase Moyano-Estrada (2006).

▼ Referencias bibliográficas

- LATTUADA, Mario; Juan Mauricio RENOLD (2004): *El cooperativismo agrario ante la globalización*. Siglo XXI, Buenos Aires, pp. 52-57.
- LATTUADA, Mario; Susana MÁRQUEZ y Jorge NEME (2012): *Desarrollo rural y política. Reflexiones sobre la experiencia argentina desde una perspectiva de gestión*, Ediciones Ciccus, Buenos Aires.
- NYSEENS, M. (1996): "Economie populaire au Sud, Economie sociale au Nord: des germes économie solidaire?", en P. Sauvage *et al.*, *Réconcilier l'économique et le social*, Paris, OCDE.
- OBSCCHATKO, Edith S. de (2009): *Las explotaciones agropecuarias familiares en la República Argentina. Un análisis a partir de los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002*, MAGyP-IICA, Buenos Aires.
- OBSCCHATKO, Edith S. de; Carlos C. BASAÑES y Guillermo D. MARTINI (2011): *Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina: diagnóstico y propuestas*, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación-IICA Argentina, Buenos Aires.
- LATTUADA, Mario; M^a Elena NOGUEIRA; Juan Mauricio RENOLD y Marcos URCOLA (2011): *Cooperativismo y capital social en la agricultura argentina a comienzos del siglo XXI*, Prosap, Ucar, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Buenos Aires.
- MOYANO-ESTRADA (2006): "Capital social y desarrollo en zonas rurales", en M. Manzanal; G. Neiman y M. Lattuada (compiladores), *Desarrollo rural. Organizaciones, instituciones y territorios*, Ediciones Ciccus, Buenos Aires, pp. 103-128.